



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**  
**SALA QUINTA DE DECISION LABORAL**

Proceso	Ordinario Laboral
Radicación	05266-31-05-008-2020-00137-01
Demandante	Claudia Patricia Aguirre Álzate, Valentina Gómez Aguirre, María Camila Gómez Aguirre
Demandado	Jorge Zapata Lara.
Asunto	Apelación auto excepción previa
Procedencia	Juzgado Laboral del Circuito de Envigado
Magistrada ponente	Sandra María Rojas Manrique
Tema:	Excepción previa –Falta de jurisdicción y competencia, clausula compromisoria

**Medellín, mayo veintinueve (29) de dos mil veintitrés (2023)**

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, decide el recurso de apelación interpuesto por el señor curador ad litem que representa la parte accionada, contra el auto proferido por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, el 13 de marzo de 2023, mediante el cual se declaró impróspera la excepción previa de falta de jurisdicción y competencia –cláusula compromisoria.

**1.- ANTECEDENTES**

Las señoras CLAUDIA PATRICIA AGUIRRE ALZATE, VALENTINA GOMEZ AGUIRRE, MARIA CAMILA GOMEZ AGUIRRE en calidad de cónyuge y herederas, respectivamente, del doctor JHON JAIRO GOMEZ JARAMILLO (q.e.p.d.), llamaron a juicio ordinario laboral al señor JORGE ZAPATA LARA, pretendiendo se declare que entre el causante y el demandado se suscribió un contrato de prestación de servicios profesionales de abogado, que al fallecimiento de este se suscribió contrato con la Dra. Nubia Elena Buitrago Gómez, contratada por las herederas para continuar los procesos de su esposo y padre; que se declare que el Dr. Jhon Jairo Gómez, cumplió a cabalidad con la prestación del servicio en forma diligente, oportuna y eficaz y que los contratos fueron incumplidos por el señor Jorge Zapata Lara, toda vez que no ha reconocido los honorarios pactados en un porcentaje del 30% más el 100% de las costas y agencias en derecho, en favor de las demandantes, herederas universales del causante; en consecuencia se condene al demandado al pago de los honorarios pactados o subsidiariamente estos sean tasados por la judicatura, de acuerdo con las tarifas legales establecidas.

El extremo pasivo de la relación procesal fue notificado a través de curador ad litem, una vez agotado el trámite de citación y ordenado su emplazamiento, profesional que replicó el libelo demandatorio, se opuso a las pretensiones y formuló como excepción previa la “falta de jurisdicción y competencia – clausula compromisoria”, aduciendo que en los contratos de prestación de servicios suscritos con el accionado, se pactó la cláusula compromisoria y por lo tanto, la controversia debe ser decida por un Tribunal de Arbitramento.

## **2.- AUTO RECURRIDO**

En audiencia llevada a cabo el 13 de marzo de 2023, el Juzgado de conocimiento, declaró impróspera la excepción previa de falta de jurisdicción o de competencia y compromiso o cláusula compromisoria, condenando en costas a la parte demandada.

### **3.- APELACIÓN**

El auxiliar de la justicia que funge como curador ad litem presentó recurso de apelación en forma subsidiaria al de reposición, solicitando se revoque la decisión por ser claro que las partes en el contrato de prestación de servicios, pactaron expresamente que toda controversia o diferencia que surja con ocasión del contrato, su ejecución y liquidación, se definirá por un Tribunal de Arbitramento, de acuerdo con el Decreto 2279 de 1995, la Ley 447 de 1998 y el Decreto 1818 de 1998 y por ende debe ser esa instancia quien resuelva el conflicto jurídico pues no se puede desconocer la voluntad de las partes.

Se apoya en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia del 19 de mayo de 2011, radicado 11001220303920110011201 y del 30 de junio de 2009, 11001220303920000031001, destacando que la jurisdicción ordinaria laboral, en principio, puede ser competente para conocer del proceso, pero en virtud de la cláusula compromisoria, esa competencia pasa, por voluntad de las partes, a un Tribunal de Arbitramento, siendo el contrato ley para los contratantes, de acuerdo con el artículo 1618 del Código Civil. Expone que teniendo en cuenta que los árbitros ejercen función jurisdiccional, por mandato constitucional, la competencia se sustrae de la jurisdicción ordinaria representada por los jueces laborales y se desplaza a los árbitros, configurándose así una falta de jurisdicción. De ahí que, en su criterio, habiéndose pactado la cláusula y habiendo sido formulada la excepción previa, esta debió ser declarada.

Finalmente solicita que, de confirmarse la decisión, se absuelva del pago de las costas al demandado, pues no se puede desconocer que se encuentra representado por curador ad litem, quien procura ejercer una defensa legítima de cara a proteger los derechos del llamado a juicio.

### **4. ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA**

El apoderada de la parte actora presentó alegatos en la oportunidad procesal, solicitando confirmar la decisión de primera instancia y declarar como improbadada la excepción previa de falta de jurisdicción y competencia -cláusula compromisoria, para lo cual aduce que estando en discusión la existencia de la contratación, no es posible aplicar las cláusulas de la misma para efectos de desconocer la competencia de la justicia ordinaria laboral, porque al finalizar el proceso la administración de justicia debe declarar la existencia de la misma, y que son reiterados los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, así como de la Corte Constitucional, donde señalan que la cláusula relativa a la necesidad de acudir al trámite arbitral, no puede obstaculizar la posibilidad de acudir a la justicia ordinaria laboral, siendo válida únicamente cuando dicha cláusula compromisoria hubiera sido objeto de discusión en medio de la negociación colectiva; en consecuencia, concluye que el derecho al acceso a la justicia a favor del prestador del servicio y o sus herederas, se encuentra en firme, teniendo así total competencia y jurisdicción el Juzgado de conocimiento.

## **5.- CONSIDERACIONES**

La competencia de esta corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2 de 1984, y los artículos 65 y 66 del CPL y de la SS, modificados por los artículos 29 y 35 de la Ley 712 de 2001.

### **5.1.- Problema Jurídico**

¿Si debe revocarse el auto proferido por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, el 13 de marzo de 2003, para en su lugar declarar probada la excepción previa de falta de jurisdicción y competencia por cláusula compromisoria, verificando, para el efecto, la validez y aplicabilidad del pacto que excluye la competencia de la jurisdicción ordinaria laboral para resolver los

conflictos originados en el contrato de prestación de servicios, cuyos honorarios se reclaman?

En caso de confirmarse la decisión, establecer ¿si procede la condena en costas a la parte representada por curador ad litem.?

## 5.2. Tesis

Los problemas jurídicos se resuelve bajo la tesis, según la cual, i) aunque la cláusula compromisoria pactada es eficaz, habida cuenta que no está contenida en un contrato individual de trabajo sino en un contrato civil de prestación de servicios, cuya naturaleza no se discute en el sub lite, no puede ser aplicada en esta causa ante la ausencia del accionado en el proceso, encontrándose en imposibilidad la jurisdicción ordinaria de fijar un plazo razonable en el cual las partes constituyan el Tribunal de Arbitramento, según la reglas jurisprudencial establecida en la sentencia C662 de 2004 ii) No procede la condena en costas al accionado.

## 5.3.- Premisas Normativas

En el estatuto procesal laboral, no se encuentran regladas las excepciones previas, más allá de la oportunidad en que deben ser resueltas, establecida por los artículos 32 y 77 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, en virtud de ello, resulta aplicable por remisión analógica lo dispuesto en el artículo 100 del Código General del Proceso, tal como lo autoriza el artículo 145 del Código propio y el artículo 1 de la ley 1564 de 2012.

Dispone la norma:

*“Artículo 100. Excepciones previas. Salvo disposición en contrario, el demandado podrá proponer las siguientes excepciones previas dentro del término de traslado de la demanda:*

- 1. Falta de jurisdicción o de competencia.**
  - 2. Compromiso o cláusula compromisoria.**
- (...)

Se precisa, inicialmente que si bien la falta de jurisdicción o de competencia y el compromiso o cláusula compromisoria, son dos excepciones previas autónomas, cuando se invoca la existencia de la cláusula compromisoria o compromiso, se genera simultáneamente la falta de jurisdicción, pues la controversia se sustrae de la competencia de la jurisdicción ordinaria laboral para pasar a un Tribunal de Arbitramento, que ejerce, también, función jurisdiccional, de conformidad con el artículo 116 de la Constitución Política.

Para resolver la controversia incumbe mencionar, inicialmente, que el legislador ha regulado la cláusula compromisoria, así:

La Ley 2a de 1938, la definió como aquella *“por virtud de la cual las partes que celebren un contrato se obligan a someter a la decisión arbitral todas las diferencias que de él puedan surgir, o alguna de ellas”*.

Asimismo, el artículo 2 del Decreto 2279 de 1989 dispuso *“Por medio del pacto arbitral, que comprende la cláusula compromisoria y el compromiso, las partes se obligan a someter sus diferencias a la decisión de árbitros, renunciando a hacer valer sus pretensiones ante los jueces*. Posteriormente el artículo 116 de la Ley 446 de 1998, adicionó el artículo 2A al Decreto 2279 de 1989 con el siguiente tenor: *“Artículo 2A. Se entenderá por cláusula compromisoria, el pacto contenido en un contrato o en documento anexo a él, en virtud del cual los contratantes acuerdan someter las eventuales diferencias que puedan seguir con ocasión del mismo, a la decisión de un Tribunal Arbitral. Si las partes no determinaren las reglas de procedimiento aplicables en la solución de su conflicto, se entenderá que el arbitraje es legal.”*

Y el artículo Decreto 1818 de 1998, a su vez, señaló *“El arbitraje es un mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un conflicto de carácter transigible, defieren su*

*solución a un tribunal arbitral, el cual queda transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia, profiriendo una decisión denominada laudo arbitral”*

Finalmente, la Ley 1563 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones”, derogó el Decreto 2279 de 1989 y el artículo 115 del Decreto 1818 de 1996, estableciendo en el artículo 3:

*“El pacto arbitral es un negocio jurídico por virtud del cual las partes someten o se obligan a someter a arbitraje controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas. El pacto arbitral implica la renuncia de las partes a hacer valer sus pretensiones ante los jueces. El pacto arbitral puede consistir en un compromiso o en una cláusula compromisoria. En el pacto arbitral las partes indicarán la naturaleza del laudo. Si nada se estipula al respecto, este se proferirá en derecho.*

*Parágrafo. Si en el término de traslado de la demanda, o de su contestación, o de las excepciones previas, una parte invoca la existencia de pacto arbitral y la otra no la niega expresamente, ante los jueces o el tribunal de arbitraje, se entiende válidamente probada la existencia de pacto arbitral.”*

En el orden procesal, el artículo 51 de la Ley 712 de 2001, que modificó el artículo 131 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social determinó que en derecho del trabajo “*La cláusula compromisoria solo tendrá validez cuando conste en convención o pacto colectivo, y el compromiso cuando conste en cualquier otro documento otorgado por las partes con posterioridad al surgimiento de la controversia*”.

La norma anterior fue declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-878-05, al considerar ajustada a derecho la validez de la cláusula compromisoria solo entrándose del ejercicio de la negociación colectiva, en protección del trabajador “*para que no renuncie a la justicia ordinaria al suscribir individualmente la cláusula compromisoria, salvo si ésta consta en convención o pacto colectivo, pues, en este caso, existe la presunción de que su inclusión fue objeto de amplio debate sobre su conveniencia, por parte del sindicato o de los representantes de los trabajadores, según el caso*”.

Consecuentemente, la cláusula compromisoria produce efectos únicamente cuando se pacta en contratos de naturaleza distinta a la laboral, pues en esta materia solo es efectiva si se concierta en los pactos o convenciones colectivas de trabajo.

#### 5.4. Caso concreto

En el caso concreto, se advierte que en la cláusula séptima de los contratos de prestación de servicios suscritos por el señor Jorge Zapata Lara con los abogados John Jairo Gómez Jaramillo (q.e.p.d), el 21 de junio de 2013 y Nubia Elena Buitrago, el 01 de septiembre de 2016, obrantes a folios 15 y 24 del anexo 02.*ExpedienteEscaneado.PDF*, se pactó:

*“SEPTIMA: Clausula Compromisoria. Toda controversia o diferencia que pueda surgir con ocasión de este contrato, su ejecución y liquidación, se resolverá por un Tribunal de Arbitramento, de acuerdo con el Decreto 2279 de 1989, Ley 446 de 1998, y Decreto 1818 de 1998”.*

En este contexto, la validez de la cláusula depende de la respuesta que se dé a la pregunta en torno a si el contrato de prestación de servicios de abogado es un contrato laboral, civil o comercial.

Para la Sala, no hay duda que el contrato de prestación de prestación de servicios profesionales de abogado, aunque regula una forma del trabajo humano, no se rige por el derecho laboral, por no ser un servicio subordinado, siendo un acuerdo de carácter civil, mediante el cual el profesional del derecho se obliga a realizar una gestión jurídica en favor de una persona o cliente, quien a su vez se compromete a pagar los honorarios acordados.

En este sentido, en principio, es válida la cláusula compromisoria por no tratarse de un contrato de naturaleza laboral, ni discutirse esta connotación en el proceso, pues, contrario a lo afirmado por el extremo activo en los alegatos de conclusión, lo pretendido no es la declaratoria de la existencia del contrato



sino el cumplimiento de una de las obligaciones emanadas de este, como lo es el pago de honorarios en favor de las herederas universales del Dr. John Jairo Gómez Jaramillo.

Es importante puntualizar que las partes pueden renunciar tácitamente a la cláusula compromisoria, la activa al presentar la demanda, como en efecto lo hizo, y la pasiva, si no propone la excepción previa respectiva, parágrafo del artículo 21 de la Ley 1563 de 2012, advirtiendo que en el sub judice el curador ad litem que representa al accionado, propuso la excepción de falta de jurisdicción por cláusula compromisoria

No obstante la actuación del curador, considera la Sala, que aunque la cláusula compromisoria es eficaz, no es procedente declarar probada la excepción, en primer lugar, porque a pesar de proponer la excepción previa, el curador ad litem no puede decidir sobre la renuncia a la cláusula compromisoria, pues, de conformidad con el artículo 56 del Código General del Proceso, *“Dicho curador está facultado para realizar todos los actos procesales que no estén reservados a la parte misma”*, pues bien, sustraer la controversia de la jurisdicción laboral, una vez la cláusula compromisoria es renunciada por la parte actora al acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, es una decisión de parte, y no puede ser adoptada por el curador ad litem en la medida en que supone erogaciones en las cuales debe concurrir su representado, que en este caso es el trabajador contratante, tales como los honorarios del centro de conciliación y arbitraje y de los árbitros designados. En segundo lugar, atendiendo a un criterio material de garantía del acceso a la administración de justicia, pues no puede olvidarse que la justicia arbitral es dispositiva y supone la concurrencia de ambas partes en el trámite, siendo conjunta la elección del centro de arbitraje, la determinación del número de árbitros y la designación de los mismos, (artículos 7,12 y 14 de la Ley 1563 de 2012), de manera que sin la comparecencia del señor Zapata Lora, no hay posibilidad real de que pueda activarse el tribunal de arbitramento, lo que haría nugatorio el derecho de acceso a la administración de justicia de la activa, pues en el

trámite arbitral el accionado no puede continuar siendo representado por curador ad litem.

En tercer lugar, la Corte Constitucional en la sentencia C-662-2004 declaró la inconstitucionalidad del artículo 97 numeral 3.º del otrora Código de Procedimiento Civil, que regulaba la cláusula compromisoria, señalando: “**SEGUNDO.** Declarar inexecutable el numeral 2º del artículo 91 del Código de Procedimiento Civil, tal como fue modificado por el artículo 11 de la ley 794 de 2003, en cuanto se refiere a la excepción de compromiso o cláusula compromisoria prevista en el numeral 3º del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil. En este caso, en el mismo auto, el juez señalará un plazo judicial razonable para que las partes inicien el trámite de integración del correspondiente tribunal de arbitramento, mientras el legislador no regule de manera distinta el tema.”

Oportunidad en la cual, además se dijo “En caso de prosperidad de la excepción de cláusula compromisoria o compromiso, ante la inexecutable de la norma acusada, **el juez de conocimiento que estime probada la excepción, deberá señalar un término razonable para la integración del tribunal de arbitramento, teniendo en cuenta para ello factores económicos, de interés de las partes, de prescripción y caducidad de los derechos, etc., de manera tal que una vez trabada la controversia y definida la jurisdicción, las partes encuentren claridad en los límites temporales a la definición de sus derechos. Nótese que este límite temporal fijado por decisión judicial, no es ajeno a la legislación civil, ya que en el artículo 119 del C.P.C., este estatuto prevé posibilidad para el juez de establecer términos, por expresa habilitación legal.** (negrilla de la Sala)

En este asunto, de declarar probada la excepción previa, no sería posible acatar la regla jurisprudencial vinculante, pues no puede señalarse un plazo razonable para que las partes inicien el trámite de integración del Tribunal pues se insiste, la parte accionada se encuentra procesalmente representada por curador ad litem y ello llevaría el litigio a una situación de indefinición que resulta contraria al mandato del artículo 228 de la Carta Constitucional.

Subsiguientemente, se impone confirmar en este tópico el auto de primera instancia, aunque por las razones expuestas en esta providencia.

En relación con las costas procesales, se REVOCARÁ la condena a la parte accionada, teniendo en cuenta que, conforme a lo antes dicho, el análisis jurídico del curador es, en principio, acertado, y si bien la decisión se confirma, ello se da, en atención a la ausencia del demandado en el proceso.

Cabe aclarar que la parte representada por curador ad litem sí puede ser condenada en costas bajo los criterios del artículo 365 del Código General del Proceso, al ser vencida en la actuación, distinto es que no pueda condenarse a la contraparte de quien esté representado por curador al pago de las agencias en derecho, en tanto las mismas no se causan, toda vez que de conformidad el numeral 7 del artículo 48 del Código General del Proceso, el curador desempeña el cargo en *“forma gratuita como defensor de oficio”*.

## 6.- DECISION

De conformidad con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.

## RESUELVE

**PRIMERO:** Se REVOCA PARCIALMENTE el auto proferido por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, en audiencia celebrada el día 13 de marzo de 2023. en el proceso ordinario laboral instaurado por las señoras CLAUDIA PATRICIA AGUIRRE ALZATE, VALENTINA GOMEZ AGUIRRE, MARIA CAMILA GOMEZ AGUIRRE en calidad de cónyuge y herederas del doctor JHON JAIRO GOMEZ JARAMILLO, en contra del señor JORGE ZAPATA LARA, y cuanto condenó en costas a la


parte accionada y en su lugar se abstiene la Sala de condenar en costas al señor Zapata Lara, conforme a lo planteado en la parte motiva.


**SEGUNDO:** Se CONFIRMA en los demás, el auto recurrido, aunque por las razones expuestas en esta providencia.


**TERCERO:** Sin costas en esta instancia

**CUARTO:** Lo resuelto se notifica por ESTADOS, de conformidad con el literal c) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social.

Los Magistrados,

  
SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

  
CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

  
VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

El presente auto fue notificado en los Estado N° 91 fijados en la Secretaría de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del 30 de marzo de 2023

\_\_\_\_\_  
RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS  
Secretario